

MEMORIA DEL TRABAJO FIN DE GRADO

Colombia: desarrollo económico en época de guerra
(Colombia: economic development in wartime)

Autoría: Carlos Camejo Mantilla

Tutorizado por: Carmen Dolores Álvarez Albelo

Grado en ECONOMÍA
FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO
Curso Académico 2023 / 2024

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de julio de 2024

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: <http://sede.ull.es/validacion>

Identificador del documento: 6600751 Código de verificación: wZ77BwpY

Firmado por: Carmen Dolores Álvarez Albelo
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 09/07/2024 17:13:57

RESUMEN

Este trabajo estudia el impacto de los conflictos armados en Colombia, que involucran guerrillas y narcotráfico, sobre indicadores de desarrollo socioeconómico. Más específicamente, utilizando técnicas de regresión, se estudia si tres indicadores de gobernanza del Banco Mundial (“Voz y rendición de cuentas”, “Estabilidad política y no violencia” e “Imperio de la ley”), en los que se ha reflejado el conflicto, explican la evolución de cuatro indicadores de desarrollo socioeconómico (renta per cápita, índice de Gini, tasa de recuento de la pobreza y esperanza de vida) durante el periodo 1996-2019. Además, el análisis también se realiza para dos países limítrofes, Brasil y Panamá, para comprobar si existe un comportamiento diferencial en el caso de Colombia. Se encuentra que los indicadores de gobernanza de Colombia explican la evolución de los indicadores de desarrollo socioeconómico, lo que no ocurre en los casos de Brasil y Panamá.

Palabras clave: Colombia, conflicto armado, desarrollo socioeconómico

ABSTRACT

This work studies the impact of armed conflicts in Colombia, involving guerrillas and drug trafficking, on socioeconomic development indicators. More specifically, using regression techniques, we study whether three World Bank governance indicators (“Voice and Accountability”, “Political Stability and Nonviolence” and “Rule of Law”), in which the conflict has been reflected, explain the evolution of four socioeconomic development indicators (per capita income, Gini index, poverty headcount rate and life expectancy) during the period 1996-2019. In addition, the analysis is also conducted for two neighbouring countries, Brazil and Panama, to test whether there is differential behaviour in the case of Colombia. It is found that Colombia’s governance indicators explain the evolution of socioeconomic development indicators, which is not the case for Brazil and Panama.

Keywords: Colombia, warfare, socioeconomic development

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	4
2. CARACTERÍSTICAS GEOFÍSICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE COLOMBIA.....	6
2.1 CARACTERÍSTICAS GEOFÍSICAS	6
2.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS	7
3. HISTORIA DE CONFLICTOS	9
3.1 GRUPOS ARMADOS.....	9
3.2 NARCOTRÁFICO	13
4. EFECTOS DE LA EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADO SOBRE EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE COLOMBIA.....	14
4.1 DATOS Y METODOLOGÍA.....	15
4.2 UN ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL CONFLICTO SOBRE INDICADORES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO.....	18
4.2.1 <i>Renta per cápita</i>	18
4.2.2 <i>Índice de Gini</i>	21
4.2.3 <i>Tasa de recuento de la pobreza a 5,50 dólares por día</i>	23
4.2.4 <i>Esperanza de vida</i>	25
5. CONCLUSIONES	27
BIBLIOGRAFÍA.....	29

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: <http://sede.ull.es/validacion>

Identificador del documento: 6600751 Código de verificación: wZ77BwpY

Firmado por: Carmen Dolores Álvarez Albelo
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 09/07/2024 17:13:57

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Departamentos y fronteras de Colombia	6
Figura 2. Comparativo de la estructura poblacional por sexo y grupos de edad, 2005 y 2018 . 8	
Figura 3. Indicadores de gobernanza de Colombia, Panamá y Brasil, 1996-2019	17
Figura 4. Relación entre la renta per cápita (\$ PPA 2017) e indicadores de gobernanza de Colombia, 1996-2019.....	19
Figura 5. Relación entre la renta per cápita (\$ PPA 2017) e indicadores de gobernanza de Panamá, 1996-2019	20
Figura 6. Relación entre la renta per cápita (\$ PPA 2017) e indicadores de gobernanza de Brasil, 1996-2019.....	20
Figura 7. Relación entre el índice de Gini e indicadores de gobernanza de Colombia, 1996-2019.....	22
Figura 8. Relación entre el índice de Gini e indicadores de gobernanza de Panamá, 1998-2019	22
Figura 9. Relación entre el índice de Gini e indicadores de gobernanza de Brasil, 1996-2019	23
Figura 10. Relación entre la tasa de recuento de la pobreza a 5,50 dólares por día (PPA de 2011) e indicadores de gobernanza de Colombia, 1996-2019.....	24
Figura 11. Relación entre la tasa de recuento de la pobreza a 5,50 dólares por día (PPA de 2011) e indicadores de gobernanza de Panamá, 1998-2019	24
Figura 12. Relación entre la tasa de recuento de la pobreza a 5,50 dólares por día (PPA de 2011) e indicadores de gobernanza de Brasil, 1996-2019.....	25
Figura 13. Relación entre la esperanza de vida e indicadores de gobernanza de Colombia, 1996-2019.....	26
Figura 14. Relación entre la esperanza de vida e indicadores de gobernanza de Panamá, 1996-2019.....	26
Figura 15. Relación entre la esperanza de vida e indicadores de gobernanza de Brasil, 1996-2019.....	27

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Población, renta per cápita e Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Colombia, Panamá y Brasil, 1996 y 2019	15
--	----

1. INTRODUCCIÓN

El impacto de los conflictos armados sobre el desarrollo socioeconómico de los países ha sido ampliamente estudiado en la literatura. Por ejemplo, Fukuda-Parr et al. (2008) realizan una revisión de la literatura sobre el nexo entre conflicto armado y desarrollo en África subsahariana durante el periodo 1980-2005, encontrando una relación negativa. Gates et al. (2012) utilizan una muestra de 146 países para analizar el impacto de los conflictos armados sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, y encuentran que estos conflictos tienen efectos perjudiciales sobre la reducción de la pobreza, del hambre y de la mortalidad infantil, la educación primaria y el acceso al agua potable.

Entre las naciones que han sufrido conflictos armados está Colombia. Los conflictos en este país se han prolongado durante más de cinco décadas, han involucrado guerrillas y narcotráfico, y se han caracterizado por crímenes de diversa naturaleza, como secuestros, violaciones y reclutamientos forzosos. La evolución de los mismos ha incluido esfuerzos del Estado para alcanzar una paz duradera y poner fin al narcotráfico. Estos esfuerzos se concretaron en la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016, el grupo guerrillero más significativo, a pesar de que en un referéndum el pueblo colombiano votó en contra de lo pactado con el grupo armado en La Habana (Cuba) en 2012 (Bray Mendoza, 2014; Ibarra Padilla y Rojas Reyes, 2021). Este acuerdo se componía de una serie de puntos, entre los cuales se encontraban algunos que provocaron el rechazo de parte de la población, como la participación de las FARC en la vida política del país y la amnistía de delitos (Melo, 2016).

Algunos trabajos en la literatura han mostrado que los conflictos armados en Colombia han tenido impactos económicos y sociales. A este respecto, Bray Mendoza (2014) realizó un estudio descriptivo de la influencia del conflicto armado sobre los tres pilares del índice de desarrollo humano (IDH), que son la esperanza de vida, el nivel educativo y la renta per cápita. La autora indica que en la década de 1990s se perdieron entre 1,5 y 2 años de esperanza de vida debido al conflicto. Además, ha tenido efectos negativos para el nivel educativo, porque muchos niños y jóvenes fueron desplazados, reclutados y/o víctimas de múltiples tipos de crímenes, se destruyó un gran número de escuelas y parte del presupuesto público que se dedicaba a educación se desvió a la lucha contra el conflicto. Por último, también la renta per cápita se ha visto afectada negativamente, debido a la generación de inestabilidad económica y al hecho de que el Estado debía desviar recursos públicos a la lucha contra el conflicto, que no estarán disponibles para fomentar el crecimiento económico y mejorar los niveles de vida de la población. En el libro de Arias et al. (2014) se realiza un análisis pormenorizado de los costes económicos y sociales del conflicto en Colombia, incluyendo aspectos como los efectos sobre la producción agrícola, la influencia sobre la salud mental de la población, el impacto sobre el crecimiento económico y las perspectivas para la reconciliación y la recuperación de la convivencia. Un análisis econométrico realizado muestra que *“si los ataques de la guerrilla se redujeran en un 100%, y todo lo demás permaneciera constante, entonces el PIB departamental aumentaría anualmente en promedio 4,4%.”* (pp. 205-206).¹

El presente trabajo tiene como objetivo contribuir al estudio de los impactos de los conflictos armados en Colombia sobre el desarrollo socioeconómico de este país. Una cuestión importante

¹ Los departamentos se refieren a regiones.

se refiere a qué variables utilizar para medir la evolución del conflicto. En otros estudios se ha utilizado el número de muertes relacionadas con el conflicto (Gates et al., 2012) o el número de homicidios, secuestros y ataques de la guerrilla (Arias et al., 2014). El presente análisis utiliza otra aproximación, conjeturando que la evolución de los conflictos en Colombia pudo haberse reflejado en algunos de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, que son “Voz y redición de cuentas”, “Estabilidad política y no violencia”, “Imperio de la ley”, “Calidad regulatoria”, “Eficacia del gobierno” y “Control de la corrupción” (Kaufmann y Kraay, 2022). La aproximación que se utiliza aquí resulta más completa, dado que los conflictos armados no solo se reflejan en el número de víctimas, sino también en la situación política, en la situación general de violencia o en la percepción de la población de que la vulneración de las leyes está debidamente penalizada. Todos estos aspectos aparecen reflejados en los indicadores de gobernanza. Por tanto, este estudio plantea la pregunta de si los indicadores de gobernanza, en los que se ha visto reflejada la evolución del conflicto en Colombia, pueden explicar el desempeño de este país en términos de indicadores de desarrollo socioeconómico.

Para comprobar cuáles de estos indicadores pudieron reflejar el conflicto, se compara la evolución de los mismos en el caso de Colombia con la de dos países limítrofes que no han experimentado la situación de Colombia y que partían en con un IDH similar en 1996, como son Panamá y Brasil.² De dicha comparación, se conjetura que el conflicto en Colombia se ha visto reflejado en aquellos indicadores en los que este país ha tenido un desempeño ostensiblemente peor que Brasil y Panamá. Una vez seleccionados los indicadores, se comprueba si los mismos pueden explicar la evolución de Colombia en términos de cuatro indicadores de desarrollo socioeconómico, como son la renta per cápita, el índice de Gini, la tasa de recuento de la pobreza y la esperanza de vida. Para ello, se recaba información estadística de los indicadores de gobernanza y de los cuatro indicadores de desarrollo socioeconómico en la base de datos del Banco Mundial, cubriendo el periodo 1996-2019. Con estos datos, se realizan regresiones que toman como variable explicada cada uno de los indicadores de desarrollo, y como variable explicativa cada uno de los indicadores de gobernanza seleccionados, para comprobar si existe una relación significativa entre cada par de variables. Además, para comprobar si los resultados para el caso de Colombia son diferentes respecto a los de Panamá y Brasil, este análisis también se realiza para estos dos países limítrofes.

El resto del trabajo está estructurado como sigue. La sección 2 realiza una presentación de Colombia, en términos de características geofísicas y socioeconómicas. La sección 3 ofrece una panorámica de la evolución de la historia de conflictos armados en Colombia, distinguiendo entre grupos armados y narcotráfico. La sección 4 lleva a cabo el análisis empírico del impacto de los indicadores de gobernanza, en los que se ha visto reflejado el conflicto, sobre los cuatro indicadores de desarrollo socioeconómico ya mencionados. Por último, la sección 5 ofrece las conclusiones del trabajo.

² Se toma el año 1996 al ser el primero para el que existe información sobre los indicadores de gobernanza.

2. CARACTERÍSTICAS GEOFÍSICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE COLOMBIA

A modo de presentación del país, esta sección expone las principales características geofísicas y socioeconómicas de Colombia.

2.1 CARACTERÍSTICAS GEOFÍSICAS

La República de Colombia se encuentra ubicada en la esquina noroccidental de América del Sur. Además, es el único país que está entre el océano Atlántico y Pacífico, lo que hace que tenga muchas variedades de clima. Cuenta con una posición privilegiada gracias a su ubicación, la cual facilita su comunicación con varios países y otros continentes. El país cuenta con una superficie de 2.070.408 km², de los cuales 928.660 km² son marítimos. Colombia se extiende de tal forma que tiene incluso archipiélagos en el Mar Caribe llamados San Andrés, Providencia, San Bernardo y del Rosario. En el Océano Pacífico nos encontramos Malpelo y las islas Gorgona y Gorgonilla. (Geografía de Colombia, 2021)

Colombia cuenta con 6.342 km de frontera terrestre. Limita con Venezuela y Brasil por oriente, en el sur con Ecuador y Perú, también por occidente con el Océano Pacífico, en el noroccidental con Panamá y el norte con el Mar Caribe, donde limita con varios países de esta zona como Haití, Jamaica, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. Esto ha permitido al país establecer muchos puntos de comercio terrestre y marítimo, además de ser un paso casi obligatorio para la navegación aérea entre países del norte y el sur (Geografía de Colombia, 2021).

En la Figura 1 se puede observar cómo están distribuidos los 32 departamentos y sus ciudades capitales. Además, de la localización estratégica de Colombia con sus límites territoriales con Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú y Panamá, destacar las islas de Malpelo en el Pacífico y San Andrés en el Caribe.



Figura 1. Departamentos y fronteras de Colombia

Fuente: Colombia Mapa Político, 2021, <https://elordenmundial.com/mapas/mapa-politico-colombia/>

La República de Colombia cuenta con uno de los mayores recursos hídricos del mundo. Esto se debe a la condición geográfica y de terreno que posee, ya que al año tiene una precipitación

6

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: <http://sede.ull.es/validacion>

Identificador del documento: 6600751

Código de verificación: wZ77BwpY

Firmado por: Carmen Dolores Álvarez Albelo
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 09/07/2024 17:13:57

anual de 3.000 mm, promedio muy elevado si se compara a nivel mundial. El país cuenta con una extensa superficie de agua, además de contar con grandes zonas de agua subterráneas, humedales y lagos.

Colombia cuenta la mayor parte del año con altas temperaturas, aunque hay que tener en cuenta la cordillera de Los Andes que influye en el clima de ciertas zonas del país, así como sus alrededores, generando un clima frío debido a la gran altura y a la menor presión atmosférica.

Colombia cuenta con 5 regiones naturales y una que es marítima, estas son la región Amazónica, región Andina, región del Caribe, región Costa Pacífica, región Orinoquia y la región Insular. La región Amazónica comprende grandes extensiones de selva de oriente y sur del país; se caracteriza por ser una región plana y de poca altitud. La región Andina ocupa las zonas centrales del país, destaca por tener los valles interandinos y cordilleras, además de tener un relieve montañoso, el cual origina una diversidad de climas. La región Caribe comprende toda la zona de la costa colombiana caribeña posee varios tipos de climas. La región Costa Pacífica abarca todo el occidente del país región con abundantes llanuras y abundantes lluvias. La región Insular abarca todas las islas de Colombia, las cuales se clasifican como continentales y oceánicas (Geografía de Colombia, 2021).

2.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

Colombia es uno de los países con mayor PIB de América del sur, lo que se debe al crecimiento de las exportaciones y la inversión extranjera. Colombia se centra principalmente en la exportación de café, pero varios sectores como el de las esmeraldas y la floricultura también son relevantes (Economía de Colombia, 1 de julio de 2024).

Las principales industrias del país son la alimentaria, equipos mecánicos, transporte, armamentista, floricultura, ganadería, minería, petrolera, química y textil. Las exportaciones del país fueron de unos 60.300 millones de dólares (2022). Los productos exportados fueron petróleo, carbón, café, oro, flores cortadas, níquel y plátanos. Los países con los que más exporta son Estados Unidos un 25,8%, Panamá 9,69%, Países Bajos 6,09%, India 4,29%, Brasil 3,96%, Turquía 3,76%, China 3,67%, Ecuador 3,14%, México 2,87%, Chile 2,7%, España 2,52%, Alemania 2,1% y otros 29,1%. Las importaciones ascendieron a 73,500 millones de dólares (2022), siendo los principales productos importados los vehículos, maíz, aparatos eléctricos, y soja. Los países de los que más importa son Estados Unidos con un 26,4%, China 24,6%, Brasil 7,02%, México 4,9%, Alemania 3,05%, India 2,16%, España 2,07%, Japón 2,05% y otros 27,75% (Observatory of Economic Complexity, s.f.).

Según el Banco Mundial, en 2022 Colombia tenía una población de 51.874.024 personas, de las cuales 25.770.913 formaban parte de la fuerza de trabajo, siendo la tasa de paro del 10,55%. La tasa de inflación de este año ascendió al 10,18% (World Bank, 2024).

En lo referente a las finanzas públicas, en el año 2017 el país contaba con un ingreso de 83,35 mil millones de euros y un gasto público de 91,73 mil millones. En cuanto a la deuda interna pública, esta suponía el 49,4% del PIB, mientras que la deuda externa pública era de 101.557 millones, un 32,7% del PIB (Economía de Colombia, 1 de julio de 2024).

Respecto al impacto del conflicto armado, destaca una economía muy irregular, dada la destrucción de recursos y riqueza, además del desvío de la inversión del sector público a la lucha contra el conflicto, dejando de lado el desarrollo humano. Los costes del conflicto se ven reflejados

7

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: <http://sede.ull.es/validacion>

Identificador del documento: 6600751 Código de verificación: wZ77BwpY

Firmado por: Carmen Dolores Álvarez Albelo
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 09/07/2024 17:13:57

en la destrucción de infraestructura y materiales. Los costes deben ser asumidos por los colombianos, siendo los costes del conflicto para el Estado de un 2% del PIB anual, afectando de forma negativa al desarrollo socioeconómico del país, porque debería invertirse en otras necesidades como la reducción del hambre, la miseria, el desempleo y la pobreza. Esto hace que Colombia pierda el 17% de su ingreso per cápita durante 10 años. La inversión para las fuerzas armadas fue de un 17,9% del presupuesto anual para el conflicto armado interno. El país afronta una serie de problemas a los que debe hacer frente, como mejoras en la calidad de la educación, la salud, la lucha contra explotación de menores y la desnutrición de los mismos (Bray Mendoza, 2014).

Desde el 2000 hasta el 2013 los abusos de las guerrillas dejaban cada año unas 150.000 personas desplazadas de sus hogares, siendo Colombia el segundo país del mundo con más desplazados internos. El conflicto armado interno ha provocado desde 1958 aproximadamente 220.000 muertes, de las que el 81,5% han sido civiles. Respecto a la educación, su nivel es extremadamente desfavorable, dado que muchos niños y jóvenes no pueden estudiar, al ser desplazados por el conflicto o reclutados a la fuerza, además de los abusos por parte tanto del Estado como de los guerrilleros. Según un informe internacional sobre 2012, Colombia cuenta con un 25% de niños combatientes, un 13% son secuestrados y un 18% reconoce haber matado. Esta situación genera un alto índice de analfabetismo, sobre todo en las zonas rurales. Irina Bokova, directora de la Unesco, señala que los actos cometidos por la violencia han afectado al nivel de educación continuada en el país, donde los jóvenes están obligados a elegir entre un fusil o su propia vida (Bray Mendoza, 2014).

Respecto a la población, según el censo nacional de 2018, realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia tiene una población de 48.258.494 de personas, siendo el 48,8% hombres y el restante 51,2% mujeres. La mayoría de la población, un 68,3%, tiene edades comprendidas entre los 15 y los 64 años; solo un 9,1% tiene 65 o más años y un 22,6% tiene entre 0 y 14 años. Gran parte de la población, un 77,1%, habita en zonas urbanas. En Bogotá D.C. viven 7.181.469 personas, un 14,88% de la población del país.

En la Figura 2 se puede apreciar cómo ha variado la estructura de la población del año 2005 a 2018. En 2005 un gran porcentaje de la población se encontraba en edades comprendidas entre 0 y 19 años. Cabe destacar cómo la población joven, en la base de la pirámide, se ha reducido sustancialmente en 2018 respecto a 2005.

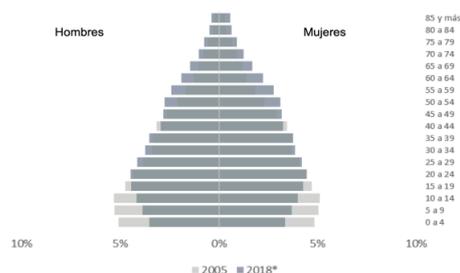


Figura 2. Comparativo de la estructura poblacional por sexo y grupos de edad, 2005 y 2018
 Fuente: DANE, CNPV-2018. <https://www.t.ly/zoqqj>

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
 La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: <http://sede.ull.es/validacion>

Identificador del documento: 6600751 Código de verificación: wZ77BwpY

Firmado por: Carmen Dolores Álvarez Albelo
 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 09/07/2024 17:13:57

3. HISTORIA DE CONFLICTOS

Colombia ha sido un país con una historia marcada por los conflictos internos, donde destacan los conflictos armados contra los grupos insurgentes y el narcotráfico. En esta sección se realiza un análisis de la evolución de los grupos armados y del narcotráfico en Colombia, desde sus inicios hasta la actualidad.

3.1 GRUPOS ARMADOS

A principios de 1960 surge el Ejército de Liberación Nacional (ELN), como consecuencia de la revolución cubana de Fidel Castro. Los principales dirigentes, que son Fabio Vásquez Castaño, Víctor Medina Morón, Ricardo Lara Parada o Heriberto Espitia, viajarán a Cuba a recibir formación política y militar que aplicarán poco después en Colombia. Desde 1963, con Fabio Vásquez como líder este grupo, el ELN se dará a conocer en el departamento de Santander. A lo largo de 1965 la guerrilla toma los municipios de Simacota y Papayal, imponiendo su ideología marxista y llamando a las armas al pueblo para luchar por el poder. El más famoso de los miembros del ELN es Camilo Torres Restrepo, un intelectual, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, además de sacerdote, el cual dará más intensidad al discurso y propaganda política de la guerrilla. Su objetivo era la unión del cristianismo y el marxismo-leninismo. Torres fue abatido en 1966 en un operativo militar, cuando lo enviaron al frente sin tener formación para la lucha. Su pérdida será para el ELN una gran derrota (Ríos Sierra, 2019, p. 22).

En 1964 se forma el Bloque Sur, siendo un movimiento de origen rural dedicado a la lucha agraria por los derechos de los campesinos. En 1966 en la II Conferencia Guerrillera celebrada en El Pato (Meta) pasan de llamarse Bloque Sur a Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) en ese momento cuenta con unos 350 insurgentes. El líder de las FARC es Manuel Marulanda y su lugarteniente Jacobo Arenas. Los principales reclutas serán campesinos entrenados para la acción armada. Durante este año estuvo a punto de desaparecer debido a que un contingente grande de guerrilleros al mando de Ciro Trujillo será atacado por una unidad militar en el departamento de Quindío. En esta batalla las FARC perderán cuantiosos guerrilleros y el 70% de su armamento. En la IV Conferencia Guerrillera de 1970 las FARC doblarán sus efectivos. En 1982 este grupo se vuelve menos relevante y evitará la mayoría de conflictos con el Estado. Las FARC se concentrarán en los territorios de Tolima, Cauca, Águila, Caquetá, Urabá y el Magdalena Medio, teniendo varias frentes de guerra. Entre el 4 y el 14 de mayo de 1982 las FARC incorporan unas nuevas siglas referidas a "Ejército del Pueblo", siendo ahora FARC-EP. Durante este mismo año, los dirigentes se dan cuenta de lo beneficioso que es el narcotráfico para su causa, incorporándolo a su financiación, hasta ese momento basada en asesinatos, robos y secuestros. Destacar que durante el mandato del presidente de la República Belisario Betancur (1982-1986), se obrará por formar un proceso de paz, llegando a una tregua con las FARC-EP. Sin embargo, el grupo armado usará este periodo de tregua para fortalecerse y rearmarse durante muchos años al mando de Manuel Marulanda, el cual era el principal objetivo de la guerrilla (Ríos Sierra, 2019, p. 18).

El grupo armado de las FARC-EP llegó a tener en 1990 más de veinte mil guerrilleros, con una gran cantidad de frentes de guerra y territorio conquistado. Esta situación evidencia que el Estado no controlaba el país. En 2008 desaparece su fundador, Manuel Marulanda, de muerte natural. Su muerte afecta a la organización, aumentando los desertores y disminuyendo la moral. El liderazgo

9

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: <http://sede.ull.es/validacion>

Identificador del documento: 6600751 Código de verificación: wZ77BwpY

Firmado por: Carmen Dolores Álvarez Albelo
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 09/07/2024 17:13:57

pasa a Alfonso Cano (nacido como Guillermo León Sáenz Vargas). Esta situación fue aprovechada por el gobierno, el cual envió una fuerza militar financiada por Estados Unidos que logró en 2010 la muerte del importante e influyente comandante militar llamado "Mono Jojoy". Poco después, en 2011, Alfonso Cano cae abatido por militares. Durante este tiempo, las FARC-EP perdieron bastantes combatientes, pasando a tener entre seis mil y ocho mil, reduciendo los frentes de guerra y sus actividades. No obstante, su forma de financiarse no cambió, dedicándose al narcotráfico, robos y secuestro. El pueblo colombiano, lejos de apoyar a este grupo armado, tiene una opinión negativa de las FARC-EP (LaRosa y Mejía, 2013, p. 117).

A continuación, tenemos a la guerrilla M-19, que tiene su origen en 1970, con las elecciones presidenciales donde el partido conservador de Misael Pastrana ganó al partido Alianza Nacional Popular liderado por Gustavo Rojas Pinilla (LaRosa y Mejía, 2013, p. 117). Un grupo de extrema izquierda de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), compuesto por Jaime Bateman Cayón, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina y Luis Otero Cifuentes, junto a otros, son los fundadores del M-19, que en 1975-1976 se separa del partido por desacuerdos. El M-19 nunca tuvo una ideología precisa. Destaca por su nacionalismo y su violencia urbana como guerrilla armada. El aumento de guerrilleros de este grupo se debió a que en la década de 1980s el país sufre una inflación del 30%, un tipo de interés del 50% y una tasa de desempleo del 14%. Esta situación económica adversa provoca tensiones sociales que aprovechan los guerrilleros. El M-19 es una guerrilla urbana, su influencia se centra en las ciudades colombianas, como Bogotá, Bucaramanga, Ibagué, Cali y Medellín, y en menor medida Boyacá, Popayán, Barrancabermeja, Cauca, Nariño, Huila, Putumayo y Risaralda (Ríos Sierra, 2019, p. 29).

Entre las acciones más destacadas de esta guerrilla se encuentran el asalto a una base militar de Bogotá (1979), el robó de la espada de Simón Bolívar del Museo de Quinta de Bolívar (1974) y la toma de la embajada de la República Dominicana (1980) con varios rehenes y varios diplomáticos. El acto por el que serían más conocidos es el que se llevó a cabo el 6 de noviembre de 1985, con el asalto armado al Palacio de Justicia, teniendo como rehenes a los magistrados del tribunal superior de justicia; su objetivo era poner en duda el gobierno de Betancur. El ejército colombiano actuó con contundencia. Al asedio solo sobrevivió un guerrillero y hubo más de 100 muertos, entre jueces y funcionarios (LaRosa y Mejía, 2013, p. 118).

El 2 de abril de 1988, el M-19 empezó a negociar la paz con el gobierno liberal de Virgilio Barco declarando, de este modo, el cese al fuego. El 9 de marzo de 1990 con el Acuerdo de Corinto se transforma en el partido político la Alianza Democrática M-19, obteniendo el 12% de los votos en las elecciones generales (Ríos Sierra, 2019, p. 29).

La guerra entre el Estado colombiano y la guerrilla en la mayoría de casos es hostil, afectando en su gran mayoría a la población rural, la cual es asesinada y, en el mejor de los casos, obligada a trabajar para las guerrillas. En una etapa inicial, desde 1988, hubo numerosas masacres por la intensificación del conflicto y el aumento de los apoyos a la guerrilla, siendo más intenso y hostil. Debido al fracaso de la tregua el 20 de febrero de 2002 con el gobierno de Pastrana y a la llegada de Uribe, se recrudeció el conflicto, con más operativos militares para recuperar los territorios en posición de los guerrilleros. A partir de 2002, con el elevado número de muertos tanto de la guerrilla como civiles, hubo una desescalada hasta 2010 (Calderón Rojas, 2016, p. 235).

Para poder combatir a las guerrillas de izquierdas, las fuerzas armadas han tenido una estrecha relación con los grupos paramilitares. Es importante destacar que estos no tienen ningún mando en el ejército, pero ambos sí tienen objetivos comunes.

Los grupos armados tenían una economía que dependía de las zonas donde tenían el control, utilizando la tierra, la población y recursos varios. Las formas de financiar el armamento y todas sus actividades son el asesinato, la extorsión y el secuestro, aunque esto último solo lo emplearían hasta 2002. Para financiar todas sus actividades, armamentos y sobornos empiezan a recurrir a maneras ilegales como el secuestro, asesinato y la extorsión a los mineros y petroleros. Por supuesto, cuando se dieron cuenta de los beneficios del narcotráfico, se dedicaron a la elaboración y distribución de droga (Cadavid, 2010, p. 5).

En el aspecto militar, las guerrillas se centraron en el hostigamiento, emboscada y un conjunto de enfrentamientos rápidos, siendo muy efectivo a principios del conflicto. Con estas estrategias lograron conquistar las zonas apartadas para aumentar su influencia y economía, el cual era su objetivo (Cadavid, 2010, p. 6).

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) trató de hacer campañas políticas en sus zonas de influencia para que no solo se unieran más guerrilleros, sino también para dividir el país. Esta guerrilla controlaba parte de Antioquia hasta el occidente de Arauca. Esta guerrilla fue frenada por grupos ilegales de derechas llamados Autodefensas en la Serranía de San Lucas.

Las FARC-EP tendrá un primer objetivo que sería envolver la Cordillera Oriental desde la Macarena para cercar el centro económico y político del país, que sería Bogotá, pero el ejército llevaría a cabo una operación que impediría a la guerrilla lograr su objetivo. Esta derrota haría que las FARC-EP se replegaran y perdieran los territorios de la Cordillera Oriental. El ejército retomó Sumapaz, territorio en manos de las FARC-EP desde hacía muchos años. En 2008 se produjo una gran ofensiva militar que no solo acabó con la derrota de la guerrilla, sino también con la vida de Raúl Reyes, esto provocó la retirada al sur de las FARC-EP. Para 2010, las continuas derrotas y la desertión de muchos guerrilleros provocaron que los comandantes de las FARC-EP quisieran desviar la atención del gobierno para centrar todas sus actividades en el narcotráfico en la zona sur, para de esta forma volver a fortalecerse (Cadavid, 2010, p. 6).

Tal como expone Fisas (2010, p. 16), *“A finales de 2010, por tanto, no existían todavía las condiciones para que se iniciaran diálogos con la insurgencia. No obstante, tanto las declaraciones de las FARC como del ELN a lo largo del año, insistiendo en la salida política negociada, hacían pensar en el interés de dichas guerrillas en iniciar acercamientos con el nuevo gobierno. Una posible suavización de las exigencias de ambas partes sería, sin embargo, la clave para que se iniciaran movimientos exploratorios que pudieran abrir negociaciones formales.”*

A partir de 2010 comienza lo que se considera como la etapa intermedia del conflicto, caracterizada por las negociaciones de paz en La Habana. Durante esta etapa es evidente la superioridad de las fuerzas militares, que cuentan con el apoyo y armamento de Estados Unidos, con una nueva estrategia la cual deja fuera de combate a los guerrilleros y recupera los territorios ocupados. Debido a las continuas derrotas y a no ver soluciones a corto y medio plazo, el 4 de noviembre de 2012 se inician de forma oficial los acuerdos de paz. El acuerdo consta de seis puntos, los cuales son: participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, víctimas, refrendación de los acuerdos y acuerdos agrarios. La comunidad internacional ve con buenos ojos estos acuerdos para el fin de lucha interna (Calderón Rojas, 2016, p. 243).

La etapa final está centrada en el tránsito del conflicto al postconflicto. El Estado y la sociedad colombianos tenían una cosa clara, y es que para que la transición sea exitosa hay que elaborar un modelo que permita flexibilizar la justicia, pero sin excesos que lleven a la impunidad. Se llevaron a cabo la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), la Ley de Justicia y Paz (Ley 075/2005) y la aprobación del reciente Marco Jurídico. En 2013 el Movimiento de Víctimas y Movimiento de Derechos Humanos de Colombia creó una comisión para los delitos contra los derechos de los ciudadanos colombianos, lo que estaba recogido en el acuerdo de paz. Para la negociación se acordaron dos principios: el principio de justicia, que trata de investigar los crímenes, y el principio de reparación, que consiste en ayudar a las víctimas que fueron forzadas a abandonar sus casas y sus tierras. Por último, se acordó la desmilitarización de los territorios más afectados para el retorno de las víctimas. (Calderón Rojas, 2016, p. 244)

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013, p. 305), *“En Colombia, según reportes de organismos nacionales e internacionales, las mujeres han sido víctimas de múltiples, atroces y sistemáticos crímenes del conflicto armado. Las cifras del RUV al 31 de marzo del 2013 registran que entre 1985 y el 2012, 2.420.887 mujeres han sido víctimas de desplazamiento forzado, 1.431 de violencia sexual, 2.601 de desaparición forzada, 12.624 de homicidio, 592 de minas antipersonal, 1.697 de reclutamiento ilícito y 5.873 de secuestro.”*

La violencia de género y la cultura patriarcal es común en Colombia. En Antioquia, donde más ha afectado el conflicto, las mujeres sufrieron violencia directa o indirectamente, con torturas, asesinatos, crímenes sexuales y la muerte de la familia. Las mujeres, por las circunstancias del conflicto armado, en ocasiones tenían que hacerse cargo de la economía familiar, haciéndolas más vulnerables a la violencia de género. Con Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de la Paz, se concedió garantías de no cumplir penas de cárcel al 10% de 50.000 paramilitares que cometieron crímenes contra las mujeres. En la época del conflicto armado muchas mujeres fueron desplazadas de sus casas a lugares donde no tenían oportunidades (difícil acceso a sanidad, educación y seguridad), esto provocó que muchas terminaran en la delincuencia, el tráfico de drogas, la prostitución y la violencia. A todo ello se suma la imposibilidad de denunciar, pues el Estado no intervenía y los grupos armados ilegales solían vengarse con violencia hacia ellas y sus familias. En las regiones que estaban bajo mando directo de la guerrilla o los paramilitares, las menores de 25 años debían tener un comportamiento estricto, pues de lo contrario eran objeto de escarnio público, incluso llegando a las agresiones físicas, sexuales y tortura.

El reclutamiento de mujeres no es únicamente forzado, sino que es visto también como una forma de evitar la pobreza extrema, pasando a trabajar para los grupos armados. Dentro de estos grupos, las mujeres son utilizadas para labores domésticas y prostitución, y prácticamente nunca como combatientes. No obstante, una parte de ellas optaron por unirse a estos grupos por su formación política o por razones ideológicas.

La justicia para las mujeres llegó muy tarde, en Colombia el 24 de agosto de 2012 una fiscalía de la Unidad de Justicia y Paz realizó la primera audiencia sobre violencia de género ligada al conflicto armado en Antioquia (Rico, 2014, pp. 4-13).

Por último, las mujeres han formado varios grupos feministas, como la Corporación Madres de la Candelaria Línea Fundadora, que es la más conocida de Antioquia y colabora en la denuncia, ayuda y defensa de mujeres. Otros grupos son Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asfades), el Movimiento de Víctimas de Crimen de

Estado (Movice) y la Mesa Departamental sobre Desaparición Forzada. Actualmente, debido al proceso de paz, existe una colaboración entre el Estado y la guerrilla para ayudar a las víctimas, de tal manera que estas reciban la justicia que merecen (Rico, 2014, pp. 14-16).

3.2 NARCOTRÁFICO

En las últimas décadas la historia de Colombia ha estado enormemente marcada por el narcotráfico. A pesar de que hoy en día el país es ampliamente conocido por el tráfico de cocaína, la historia del narcotráfico comienza en Colombia con el cultivo de otra sustancia: la marihuana. Fue en la década de los años 60 cuando esta droga ilegal empezó a cultivarse a gran escala. El destino de la marihuana era fundamentalmente la exportación a los Estados Unidos. A principios de los años 1970s la demanda en este país aumentó considerablemente, estando relacionada con la existencia de movimientos pacifistas contrarios a la Guerra de Vietnam (Atehortúa Cruz y Rojas Rivera, 2008).

Bajo la administración de Alfonso López Michelsen (1974-1978) se implanta la conocida "Ventanilla siniestra", que permitía el cambio de divisas (dólar-peso colombiano) sin necesidad de justificar la procedencia de esas. En 1981 ingresaban al país por este medio unos 1.734,3 millones de dólares, mientras que las exportaciones de café implicaban la entrada de una cantidad menor de dinero, unos 1.200 millones (Plaza, 1998). Esta "Ventanilla siniestra" estuvo en funcionamiento hasta 1991 (Redacción *El Tiempo*, 21 de junio de 1991), con el gobierno de César Augusto Gaviria Trujillo (1990-1994).

A finales de los años 1970, al Estados Unidos ser capaz de satisfacer su propia demanda interna de marihuana y cambiar las preferencias de consumo de drogas ilícitas hacia la cocaína, la actividad del narcotráfico en Colombia se tornó hacia la exportación de esta última. Las condiciones geográficas y climáticas favorecieron el cultivo de la coca. Fue en esta época cuando surgieron y adquirieron gran relevancia los diferentes carteles de la droga, siendo los más relevantes el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali (Atehortúa Cruz y Rojas Rivera, 2008).

El Cartel de Cali, liderado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño y Hélder Herrera Buitrago, tiene su origen en la banda "Los Chemas", formada por los tres primeros a principios de los años 1970 y dedicada a actividades como robos, secuestros y extorsiones. Fue posteriormente cuando comenzaron a dedicarse a la importación desde Bolivia y Perú de pasta de coca, la cual era transformada dentro de Colombia, convertida en cocaína y exportada a los Estados Unidos y Europa. Empieza así la actividad de narcotráfico de la organización. El Cartel de Cali estuvo operativo hasta la década de los años 1990 (Cadena Montenegro, 2010).

El Cartel de Medellín, una organización criminal fundada a mediados de los años 1970 por Pablo Emilio Escobar Gaviria, José Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder y los hermanos Jorge Luis y Juan David Ochoa Vásquez, estuvo dedicada sobre todo al tráfico de cocaína y al terrorismo. Llegó a convertirse en uno de los principales actores del conflicto armado durante las décadas de 1980s y 1990s, al mantener un frente abierto contra el Estado (Torres Vásquez, 2013).

Pablo Escobar, líder de este grupo criminal, tuvo gran popularidad en la sociedad antioqueña. Construyó, entre otras, numerosas viviendas e instalaciones deportivas, lo que le hizo obtener el apoyo de gran parte de los sectores más desfavorecidos de la población. En la actualidad todavía está presente la herencia de estas décadas. Así, en la ciudad de Medellín existe hoy en día el

barrio Pablo Escobar, construido por este. Además, el líder del Cartel de Medellín participó activamente en la vida política del país. En el año 1982 llegó incluso a ser congresista, ocupando este puesto durante algo más de un año (Atehortúa Cruz y Rojas Rivera, 2008).

El Cartel de Medellín libró una importante guerra contra el Estado colombiano durante aproximadamente una década. En el inicio del conflicto se sitúa la aprobación del Tratado de Extradición con los Estados Unidos, firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979 y aprobado por la Ley 27 de 1980, dado el 14 de octubre de ese año. No obstante, el conflicto se recrudeció con el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984 a manos del Cartel de Medellín. Este acontecimiento llevó a la declaración por parte del presidente de la República, Belisario Betancur (1982-1986), de la aplicación a partir de ese momento de la extradición, que previamente no venía llevándose a efecto por razones políticas. Además, este presidente ordenó la incautación de bienes a los narcotraficantes y declaró el estado de sitio (Atehortúa Cruz y Rojas Rivera, 2008).

A partir de este momento se sucedieron múltiples atentados de diversa índole. Por ejemplo, en 1986 tuvo lugar el asesinato del director del periódico *El Espectador*, Guillermo Cano Isaza. En septiembre de 1989 la sede de ese mismo diario fue atacada con un coche bomba. Ese mismo año se detonaron un centenar de bombas contra supermercados, colegios, bancos y entidades telefónicas. Asimismo, tuvo lugar el atentado contra un avión comercial de la compañía Avianca en pleno vuelo, muriendo 110 personas. En agosto de ese año es asesinado el candidato a la Presidencia de la República Luis Carlos Galán Sarmiento. En diciembre se atentó contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) (Torres Vásquez, 2013).

Tanto el Cartel de Cali como el Cartel de Medellín quedaron desmantelados después de la muerte o la captura de sus principales miembros. En caso del Cartel de Medellín, con la muerte de Pablo Escobar en 1993 a manos del bloque de búsqueda, el cartel quedó totalmente desmantelado. En el caso del Cartel de Cali siendo Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño y Hélder Herrera Buitrago sus principales jefes, el primero en ser detenido fue José Santacruz Londoño en un local de Bogotá. Pasó en la cárcel hasta 1996 de donde escapó, pero acabaría siendo asesinado por el Cartel del Valle, en complicidad con la policía, haciéndolo parecer que fue un enfrentamiento en un control policial. Por otro lado, Herrera, el cual estaba recluso en la cárcel de Palmira desde 1996, sería asesinado en una operación elaborada por un antiguo sicario del cartel de Cali llamado Wilber Alirio Varela, líder ahora del cartel del Valle. Por último, los hermanos Rodríguez Orejuela serían detenidos por la policía en 1996 y extraditados a Estados Unidos por seguir traficando desde la cárcel. Seguirán detenidos hasta 2030; este sería el fin del cartel de Cali.

4. EFECTOS DE LA EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADO SOBRE EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE COLOMBIA

En esta sección se analiza si la evolución temporal de un conjunto de indicadores de desarrollo socioeconómico en Colombia puede venir explicada por indicadores de gobernanza, en los que ha podido verse reflejada la historia de conflictos en Colombia. Para comprobar si la relación entre estos indicadores se da especialmente en el caso de Colombia, se realiza el mismo análisis para Panamá y Brasil, dos países limítrofes que partían en 1996 con un nivel de desarrollo similar al de Colombia, medido a través del IDH. El IDH es una media geométrica de tres indicadores clave del

nivel de desarrollo humano, que son la esperanza de vida, el nivel educativo y la renta per cápita. Toma valores entre 0 y 1, indicando un menor y un mayor de desarrollo humano, respectivamente (United Nations Development Programme, 2022).

Las características de los países de la muestra se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Población, renta per cápita e Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Colombia, Panamá y Brasil, 1996 y 2019

	1996	2019	1996	2019	1996	2019
	Población ¹		Renta per cápita ³		IDH ²	
Colombia	36.632.573	50.187.406	11.456	17.555	0,654	0,768
Panamá	2.771.606	4.232.532	13.690	33.305	0,697	0,820
Brasil	166.037.122	211.782.878	13.491	17.650	0,650	0,764

Fuente: ¹World Bank y ²United Nations.

Notas: ³En dólares internacionales constantes de 2021.

Como muestra la Tabla 1, la muestra contiene tres países de distinto tamaño, donde Colombia se encuentra en términos de población entre Panamá, el menor, y Brasil, el mayor. En cuanto a los niveles de renta per cápita, es de destacar que Panamá y Brasil partían en 1996 con niveles similares, mientras la renta per cápita de Colombia era unos 2.000 dólares (internacionales constantes de 2021) menor. En 2019, Colombia y Brasil alcanzaron un nivel de renta per cápita similar, mientras la de Panamá fue casi el doble de la de estos dos países. Por último, Colombia y Brasil partían con un IDH similar en 1996 y el de Panamá era ligeramente superior. En 2019 se aprecian avances significativos en el IDH, pero el patrón se repite, es decir, Colombia y Brasil presentaron un IDH similar, mientras que el de Panamá experimentó un mayor avance.

4.1 DATOS Y METODOLOGÍA

El estudio empírico del conflicto armado requiere tener en cuenta indicadores que permitan cuantificar la evolución del conflicto. A este respecto, los indicadores mundiales de gobernanza contruidos por Kaufmann y Kraay (2022), del Banco Mundial, resultan idóneos para esta tarea. Tal como aparece en la página web de la base de datos de estos indicadores, *“La gobernanza consiste en las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país. Esto incluye el proceso por el cual los gobiernos son seleccionados, monitoreados y reemplazados; la capacidad del gobierno para formular e implementar efectivamente políticas sólidas; y el respeto de los ciudadanos y el Estado por las instituciones que rigen las interacciones económicas y sociales entre ellos.”* (<https://info.worldbank.org/governance/wqi/>).

Los indicadores mundiales de gobernanza reflejan las seis dimensiones siguientes. En primer lugar, tenemos el indicador “Voz y redición de cuentas”, el cual se centra en los ciudadanos y cómo estos tienen la capacidad de participar en la elección de su gobierno y las libertades de expresión y de prensa. En segundo lugar, tenemos la “Estabilidad política y no violencia”, que mide la probabilidad de un colapso político y la violencia política, así como el terrorismo armado. En tercer lugar, el “Imperio de la ley” mide cómo los ciudadanos perciben las normas que los rigen, así como el cumplimiento de los contratos, los derechos de propiedad, la policía y los tribunales, y la probabilidad de delincuencia y violencia. En cuarto lugar, la “Calidad regulatoria” se basa en la capacidad del gobierno para implementar políticas y regulaciones sólidas que permiten el desarrollo del sector privado. En quinto lugar, el “Control de la corrupción” capta cómo el poder público es usado para el beneficio del sector privado en todos sus ámbitos, desde las formas de

corrupción más simples hasta las más elaboradas. En sexto y último lugar, la “Eficacia del gobierno” es la calidad de los servicios públicos, la calidad del servicio civil y el grado y la independencia de las instituciones políticas, la calidad e implementación de políticas, y la credibilidad del gobierno. Estos indicadores de gobernanza toman valores entre -2,5 y 2,5, reflejando de un menor a un mayor resultado en términos de la dimensión medida (Kaufmann y Kraay, 2022).

Para analizar en cuáles de estos seis indicadores se ha visto reflejado el conflicto en Colombia, comparamos la evolución temporal de cada uno de ellos en los tres países de la muestra. De esta manera podemos seleccionar aquellos indicadores en los que Colombia ha tenido un comportamiento menos favorable que en los otros dos países de la muestra. La Figura 3 muestra dicha evaluación temporal correspondiente al periodo 1996-2019. A este respecto, cabe señalar que estos indicadores comenzaron a construirse en 1996 por lo que, desafortunadamente, no se dispone de información para años anteriores que fueron significativos desde el punto de vista de la evolución del conflicto.

Como se puede observar en la Figura 3, los valores que han tomado los indicadores “Rendición de cuentas”, “Estabilidad política y no violencia” e “Imperio de la ley” en el caso de Colombia han quedado por debajo de los correspondientes a los otros dos países. En cambio, no se observa unos valores menores de los otros tres indicadores en el caso de Colombia respecto a los otros dos países. De estos resultados inferimos que el conflicto en Colombia se ha visto reflejado en los tres indicadores mencionados anteriormente.

Respecto al indicador “Voz y rendición de cuentas”, encontramos que Colombia se encuentra con valores negativos respecto de Panamá y Brasil. Los valores de Colombia están entre -0,5 y -0,1. Podemos observar que con el paso del tiempo Colombia mejora respecto a este indicador. Cabe recordar que éste recoge la participación de los ciudadanos en el gobierno y la libertad de expresión.

En el indicador “Estabilidad política y no violencia”, se puede observar que hay una gran diferencia entre Colombia y los demás países, lo que no es de extrañar debido al conflicto armado que ha sufrido el país. En 1996 el indicador de Colombia tomó un valor de -1,5, teniendo la mayor caída en 2003, bajando hasta -2,4. Después de esta caída, se produce un aumento del valor del indicador, llegando a -1,0 en 2019. Este cambio coincide con la reducción de la violencia armada en el país.

Los valores del indicador “Imperio de la ley” de Colombia son menores que los de Panamá y Brasil, pero muestra menores diferencias que en los dos indicadores anteriores. En 1996 el indicador de Colombia tomó un valor de -0,9, dando a entender que los ciudadanos tenían una visión negativa de la ley y la policía respecto a conflictos, pero con el tiempo éste fue mejorando, aunque no hay gran diferencia, llegando a -0,5 en 2019, solo un poco por debajo de Brasil y Panamá.

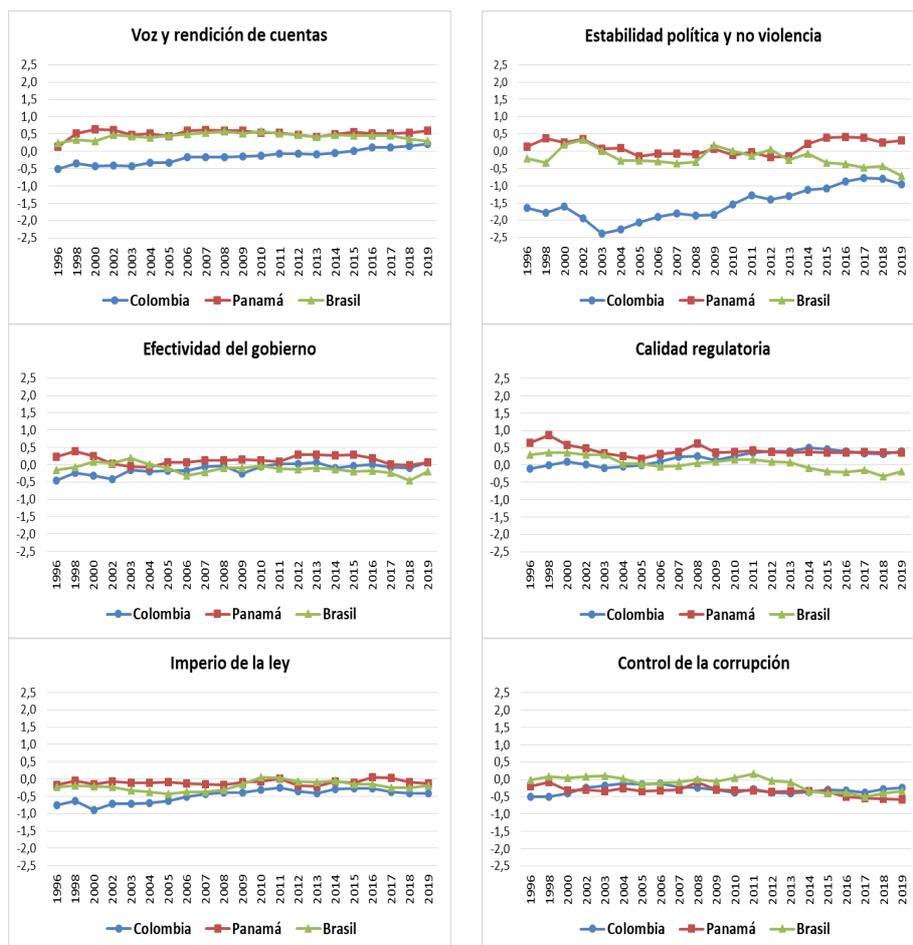


Figura 3. Indicadores de gobernanza de Colombia, Panamá y Brasil, 1996-2019

Fuente: Kaufmann y Kraay (2022).

Una vez identificados los tres indicadores de gobernanza en los que se conjetura que se ha visto reflejado el conflicto, pasamos a describir los indicadores de desarrollo socioeconómico que analizaremos. Estos indicadores son la renta per cápita, el índice de Gini, la tasa de recuento de la pobreza a 5,50 dólares por día y la esperanza de vida para Colombia, Panamá y Brasil en el periodo 1996-2019, provenientes de la base de datos de indicadores mundiales de desarrollo del Banco Mundial (World Bank, 2022).

La renta per cápita se mide a través del PIB por habitante en dólares internacionales de 2017, es decir, en paridad del poder adquisitivo. Por tanto, esta variable muestra qué renta obtendría cada habitante de una economía si esta estuviera distribuida de forma totalmente equitativa. Por tanto, es conveniente tener en cuenta alguna medida sobre cómo está distribuida. A este respecto, consideramos el índice de Gini, que mide hasta qué punto la distribución de la renta entre individuos u hogares dentro de una economía se desvía de una distribución perfectamente equitativa. Una curva de Lorenz traza los porcentajes acumulativos del ingreso total recibido contra el número acumulativo de beneficiarios, comenzando con el individuo u hogar más pobre. El índice

de Gini mide el área entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de igualdad absoluta, expresada como porcentaje del área máxima bajo la línea. Así, un índice de Gini de 0 representa una igualdad perfecta, mientras que un índice de 100 implica una desigualdad perfecta. No obstante, esta medida de desigualdad no informa sobre el porcentaje de población que vive en una situación de pobreza. Para tener en cuenta este aspecto, se considera la tasa de recuento de la pobreza a 5,50 dólares internacionales de 2011 por día, que es el porcentaje de la población que vive por debajo de este ingreso diario. Esta línea de pobreza corresponde a países de ingreso medio alto, grupo al que pertenece Colombia según la clasificación del Banco Mundial. La esperanza de vida al nacer no solo es un indicador del estado de salud general de la población, sino que además es relevante en presencia de conflictos armados (Bray Mendoza, 2014). Indica el número de años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad prevalecientes en el momento de su nacimiento se mantuvieran iguales a lo largo de su vida.

Respecto a la metodología, utilizaremos técnicas de regresión para estudiar si la evolución temporal de cada uno de los indicadores socioeconómicos que hemos seleccionado viene explicada por la evolución temporal de cada uno de los tres indicadores de gobernanza. En la regresión se analizará si los indicadores de gobernanza son estadísticamente significativos al 95% (estadístico t de Student) y el coeficiente de determinación (R cuadrado). El análisis se realizará para Colombia, Panamá y Brasil, para comprobar si los indicadores de gobernanza explican en mayor medida el desarrollo socioeconómico de Colombia que el de los otros dos países.

4.2 UN ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL CONFLICTO SOBRE INDICADORES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

En este apartado vamos analizar, a través regresiones el efecto de cada uno de los indicadores de gobernanza sobre cada uno de los indicadores socioeconómicos en los tres países de la muestra. Los resultados se presentan en gráficos, donde se muestra la nube de puntos, la línea de regresión y los resultados de la misma.

4.2.1 Renta per cápita

Las figuras 4, 5 y 6 reflejan la relación entre la renta per cápita y cada uno de los tres indicadores de gobernanza anteriormente seleccionados para Colombia, Panamá y Brasil, respectivamente.

Los tres gráficos incluidos en la figura 4 muestran que los indicadores de gobernanza de Colombia tienen un elevado poder explicativo de las variaciones de la renta per cápita. Más concretamente, los indicadores “Voz y rendición de cuentas”, “Estabilidad política y no violencia” e “Imperio de la ley” son estadísticamente significativos, con coeficientes de determinación que toman valores 0,92, 0,78 y 0,71, respectivamente. Por tanto, los respectivos indicadores de gobernanza explican el 92%, el 78% y el 71% de la variación de la renta per cápita de Colombia durante el 1996-2019.

Por el contrario, los tres gráficos incluidos en las figuras 5 y 6 muestran que los indicadores de gobernanza no tienen ningún poder explicativo, o lo tienen muy reducido, de las variaciones de la renta per cápita en Panamá y Colombia.

En el caso de Panamá (figura 5), los tres indicadores de gobernanza no son estadísticamente significativos, como también se refleja de forma clara en los valores del coeficiente de

18

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: <http://sede.ull.es/validacion>

Identificador del documento: 6600751 Código de verificación: wZ77BwpY

Firmado por: Carmen Dolores Álvarez Albelo
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 09/07/2024 17:13:57

determinación, que son 0,03, 0,06 y 0,07 para los indicadores “Voz y rendición de cuentas”, “Estabilidad política y no violencia” e “Imperio de la ley”, respectivamente.

Por último, en el caso de Brasil (figura 6) los indicadores “Voz y rendición de cuentas” y “Estabilidad política y no violencia” no son estadísticamente significativos, con valores del coeficiente de determinación de 0,18 y 0,06, respectivamente. El indicador “Imperio de la ley” es estadísticamente significativo, pero el coeficiente de determinación toma un valor reducido, igual a 0,36; por tanto, este indicador explica el 36% de la variación de la renta per cápita.

Estos resultados muestran que los tres indicadores de gobernanza que han podido reflejar el conflicto en Colombia explican en gran medida la evolución de la renta per cápita de este país. No sucede así en los otros dos países. Por tanto, estos resultados pueden entenderse como evidencia a favor de la hipótesis de que la renta per cápita de Colombia ha venido afectada por la evolución del conflicto en este país.

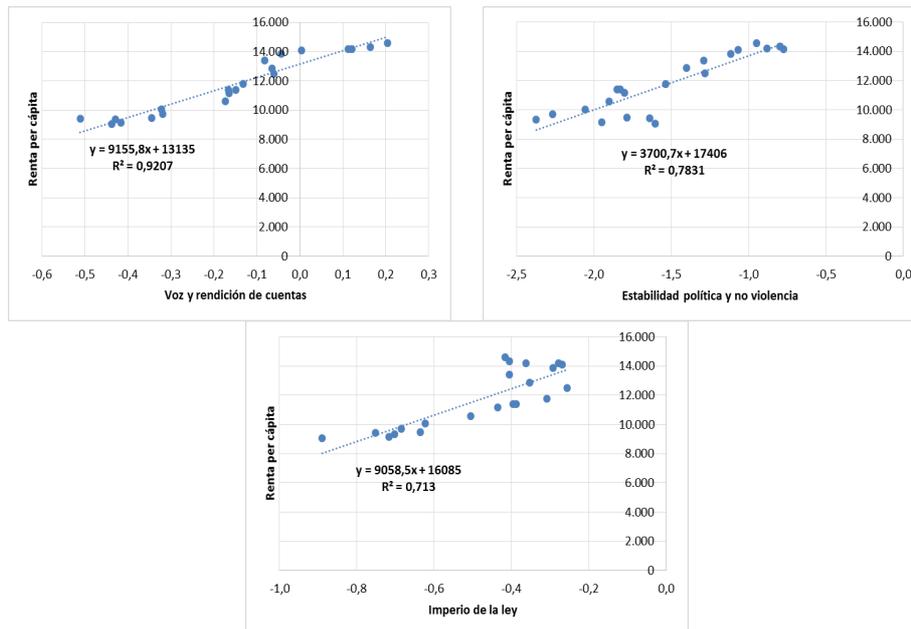


Figura 4. Relación entre la renta per cápita (\$ PPA 2017) e indicadores de gobernanza de Colombia, 1996-2019

Fuente: World Bank (2022), Kaufmann y Kraay (2022) y elaboración propia.

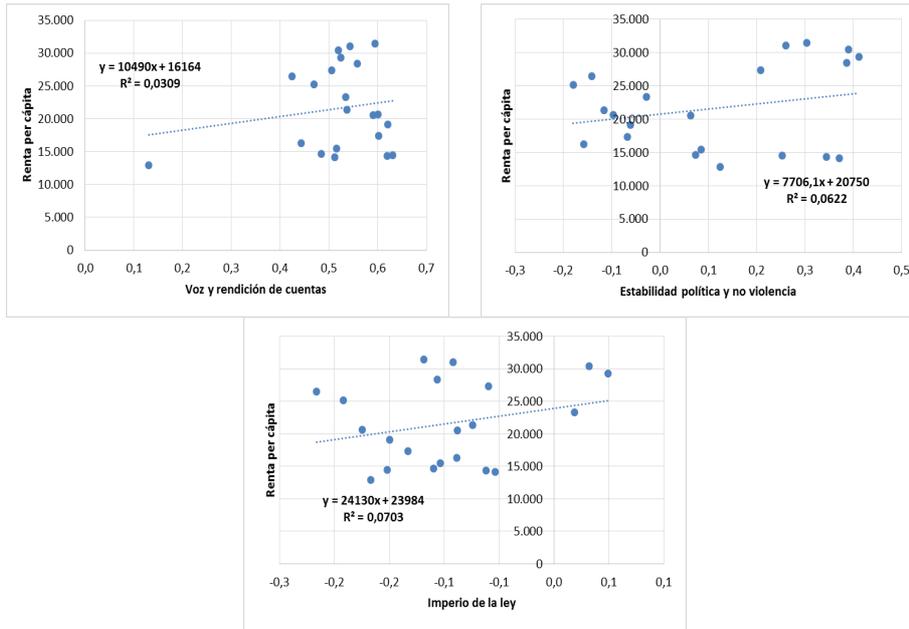


Figura 5. Relación entre la renta per cápita (\$ PPA 2017) e indicadores de gobernanza de Panamá, 1996-2019

Fuente: World Bank (2022), Kaufmann y Kraay (2022) y elaboración propia.

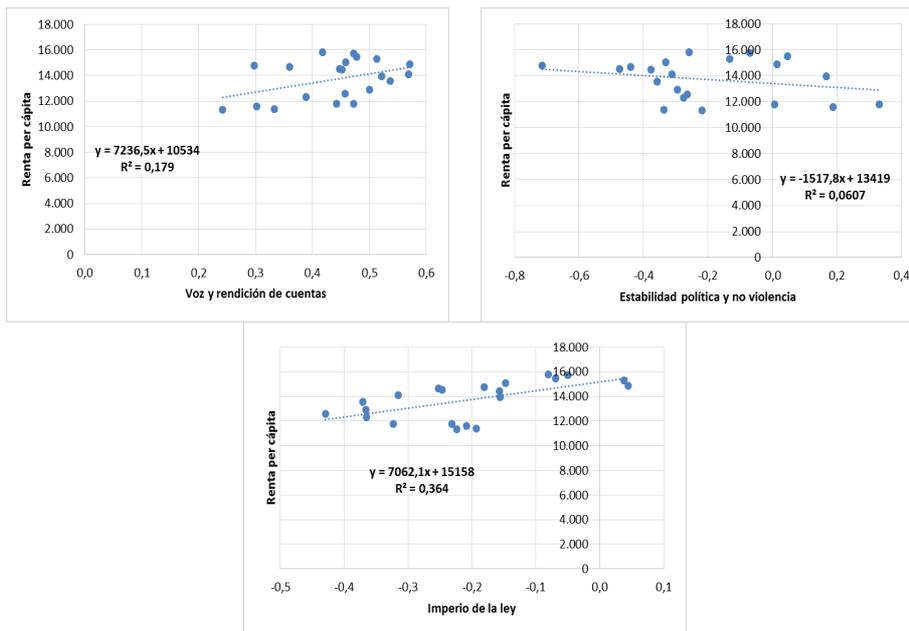


Figura 6. Relación entre la renta per cápita (\$ PPA 2017) e indicadores de gobernanza de Brasil, 1996-2019

Fuente: World Bank (2022), Kaufmann y Kraay (2022) y elaboración propia.

4.2.2 Índice de Gini

Como ya se comentó, el índice de Gini refleja la evolución de la distribución de la renta, donde el valor 0 indica la máxima igualdad y el valor 1 la máxima desigualdad. Este indicador informa sobre un aspecto diferente del desarrollo socioeconómico. La renta per cápita, anteriormente analizada, supone la renta de la que dispondría cada habitante si esta estuviera distribuida de forma totalmente equitativa, lo que evidentemente no es así. La literatura muestra que la distribución de la renta se vuelva más equitativa según un país avanza en su desarrollo socioeconómico (Bilan et al., 2020).

Las figuras 7, 8 y 9 reflejan la relación entre el índice de Gini y cada uno de los tres indicadores de gobernanza para Colombia, Panamá y Brasil, respectivamente.

Los tres gráficos incluidos en la figura 7 muestran que los indicadores de gobernanza de Colombia explican las variaciones del índice de Gini. Más concretamente, el indicador “Voz y rendición de cuentas” es estadísticamente significativo y explica el 76% de la variación del índice de Gini. La relación entre el indicador “Estabilidad política y no violencia” y el índice de Gini presenta un máximo, por lo que se ha ajustado un modelo parabólico. En el análisis de regresión todos los parámetros son significativos y este indicador de gobernanza explica el 73% de la variación del índice de Gini. Este resultado indica que para valores pequeños de este indicador de gobernanza existe una relación positiva entre ambas variables, es decir, cuando la sociedad se encuentra en niveles de estabilidad política menores la desigualdad aumenta, y sucede lo contrario cuando los niveles de estabilidad política llegan a ser suficientemente grandes. Esto indica que la reducción de los niveles de desigualdad requiere de unos niveles mínimos de estabilidad política, tal como indicó Kuznets (1967) y se corroboró por Shahab y Mahmood (2022). El argumento es que se requiere un nivel mínimo de estabilidad política para que los ciudadanos puedan planificar con antelación su comportamiento económico futuro, y estar seguros de que su contribución a la actividad económica será retribuida de manera justa. Respecto al indicador “Imperio de la ley”, este es estadísticamente significativo y explica el 53% de la variación del índice de Gini.

Como sucedió en el análisis de la renta per cápita, los tres gráficos incluidos en las figuras 8 y 9 muestran que los indicadores de gobernanza no tienen ningún poder explicativo, o lo tienen muy reducido, de las variaciones del índice de Gini en Panamá y Colombia.

En el caso de Panamá, reflejado en la figura 8, los tres indicadores de gobernanza no son estadísticamente significativos, como también se refleja de forma clara en los valores del coeficiente de determinación, que son 0,02, 0,002 y 0,035 para los indicadores “Voz y rendición de cuentas”, “Estabilidad política y no violencia” e “Imperio de la ley”, respectivamente. Cabe señalar que el periodo temporal comienza en 1998 dado que no hay información del índice de Gini para 1996.

Por último, en el caso de Brasil (figura 9) los indicadores “Voz y rendición de cuentas” e “Imperio de la ley” son significativos, y explican el 21% de la variación del índice de Gini, mientras que el indicador “Estabilidad política y no violencia” no es significativo.

Por tanto, los tres indicadores de gobernanza explican en gran medida la evolución del índice de Gini de Colombia, lo que no sucede en los otros dos países. Por tanto, estos resultados pueden entenderse como evidencia a favor de la hipótesis de que el índice de Gini de Colombia ha venido explicado por la evolución del conflicto en este país.

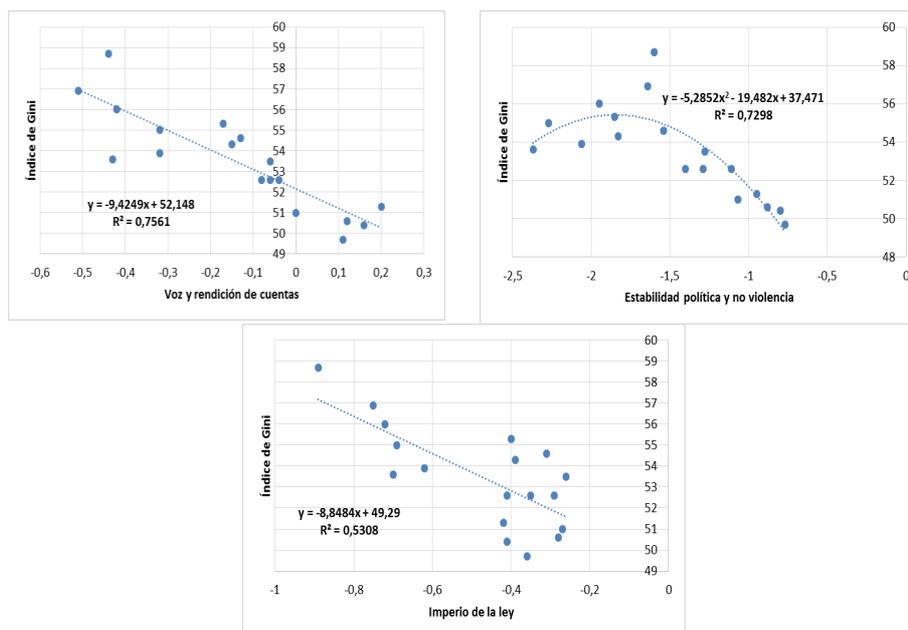


Figura 7. Relación entre el índice de Gini e indicadores de gobernanza de Colombia, 1996-2019

Fuente: World Bank (2022), Kaufmann y Kraay (2022) y elaboración propia.

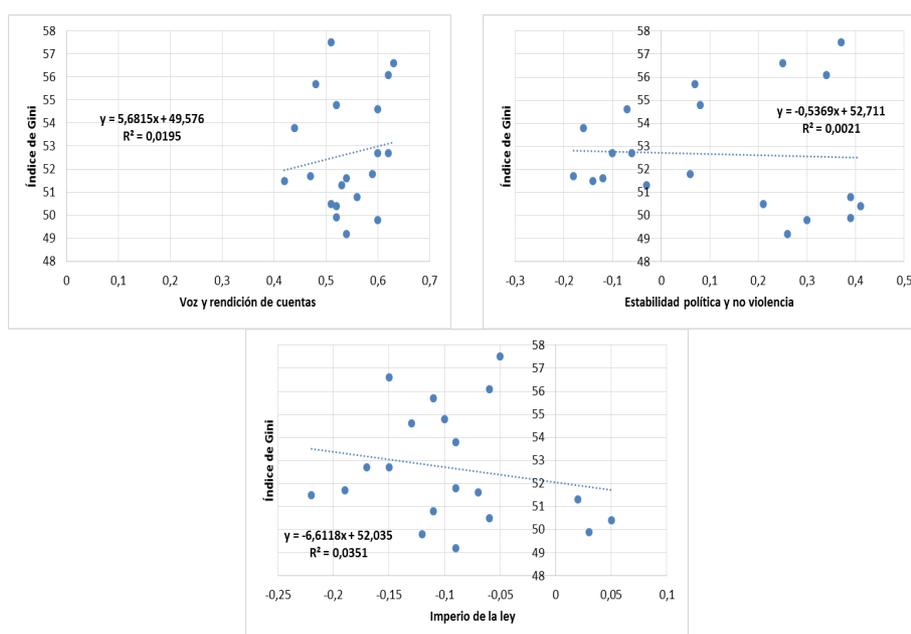


Figura 8. Relación entre el índice de Gini e indicadores de gobernanza de Panamá, 1998-2019

Fuente: World Bank (2022), Kaufmann y Kraay (2022) y elaboración propia.

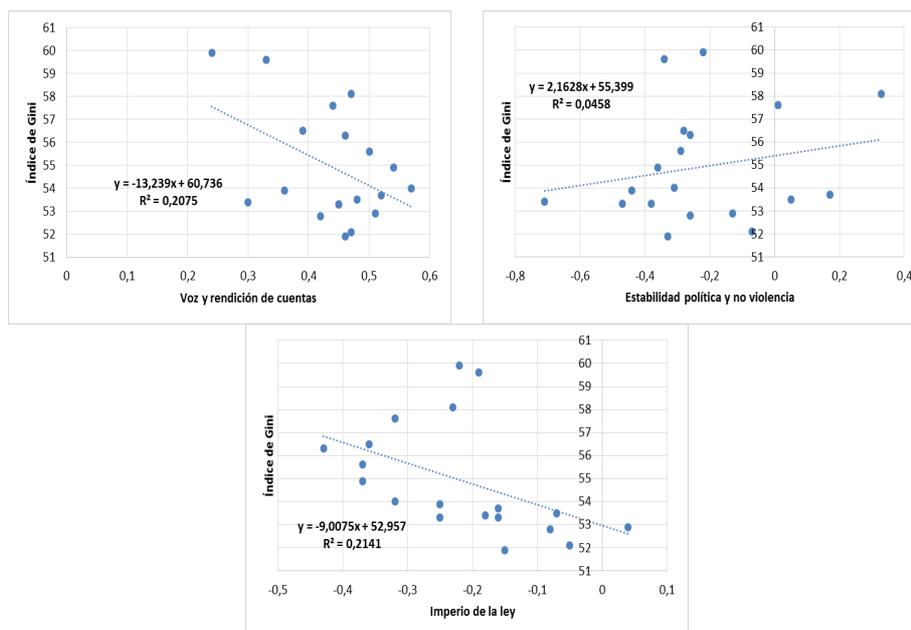


Figura 9. Relación entre el índice de Gini e indicadores de gobernanza de Brasil, 1996-2019

Fuente: World Bank (2022), Kaufmann y Kraay (2022) y elaboración propia.

4.2.3 Tasa de recuento de la pobreza a 5,50 dólares por día

La tasa de recuento de la pobreza es un indicador que está relacionado con la distribución de la renta, pero muestra un aspecto diferente. Notemos que el hecho de que un país tenga una distribución de la renta poco equitativa no implica necesariamente que su nivel de pobreza sea elevado. Por ello, es fundamental tener en cuenta los cambios en los niveles de pobreza a medida que una economía se desarrolla. En el caso que nos ocupa, es decir, el desarrollo socioeconómico de Colombia a medida que evoluciona el conflicto armado, este aspecto es especialmente relevante, dado que se espera que el impacto económico del conflicto afecte en mayor medida a la población más vulnerable, es decir, aquella que dispone de menos medios para sobrevivir.

Las gráficas de las figuras 10, 11 y 12 relacionan la tasa de recuento de la pobreza a 5,50 dólares por día con los indicadores de gobernanza, y muestran los resultados de la regresión lineal simple para Colombia, Panamá y Brasil, respectivamente.

En el caso de Colombia, los indicadores “Voz y rendición de cuentas”, “Estabilidad política y no violencia” e “Imperio de la ley” explican de forma significativa el 93,12%, el 74,23% y el 77,98% de la tasa de recuento de la pobreza a 5,50 dólares por día.

En cambio, la figura 11 muestra relaciones no significativas entre los tres indicadores de gobernanza y la tasa de recuento de la pobreza para el caso de Panamá. En concreto, el coeficiente de determinación para los indicadores “Voz y rendición de cuentas”, “Estabilidad política y no violencia” e “Imperio de la ley” toma los valores 1,77%, 2,81% y 3,31%, respectivamente. También aquí cabe señalar que el periodo temporal analizado comienza en 1998 debido a que no hay información estadística para 1998.

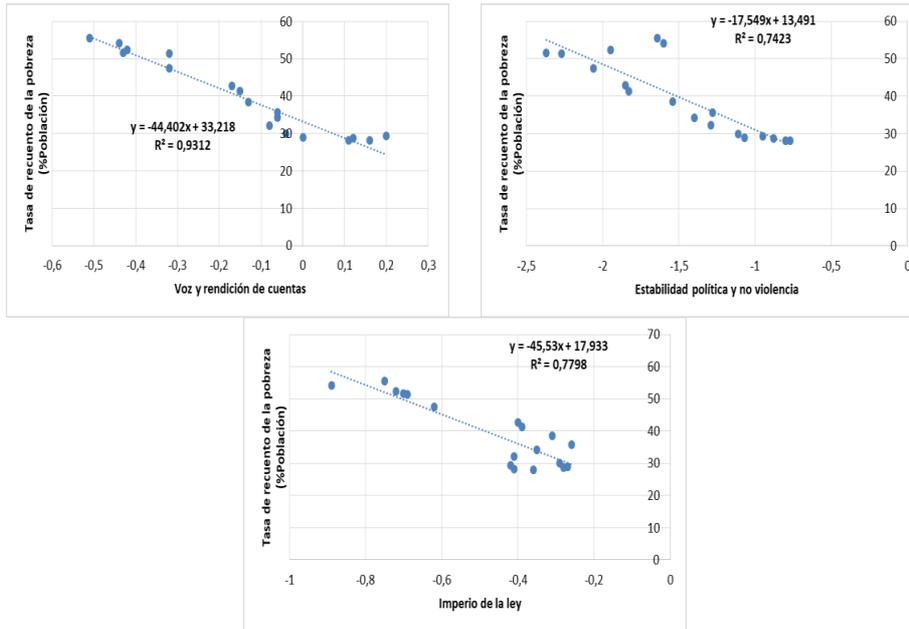


Figura 10. Relación entre la tasa de recuento de la pobreza a 5,50 dólares por día (PPA de 2011) e indicadores de gobernanza de Colombia, 1996-2019

Fuente: World Bank (2022), Kaufmann y Kraay (2022) y elaboración propia.

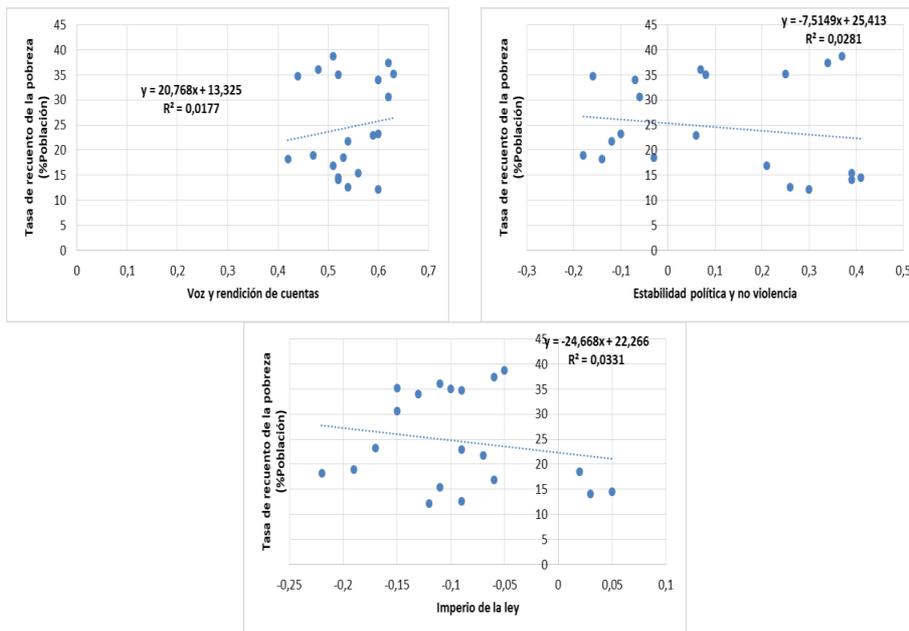


Figura 11. Relación entre la tasa de recuento de la pobreza a 5,50 dólares por día (PPA de 2011) e indicadores de gobernanza de Panamá, 1998-2019

Fuente: World Bank (2022), Kaufmann y Kraay (2022) y elaboración propia.

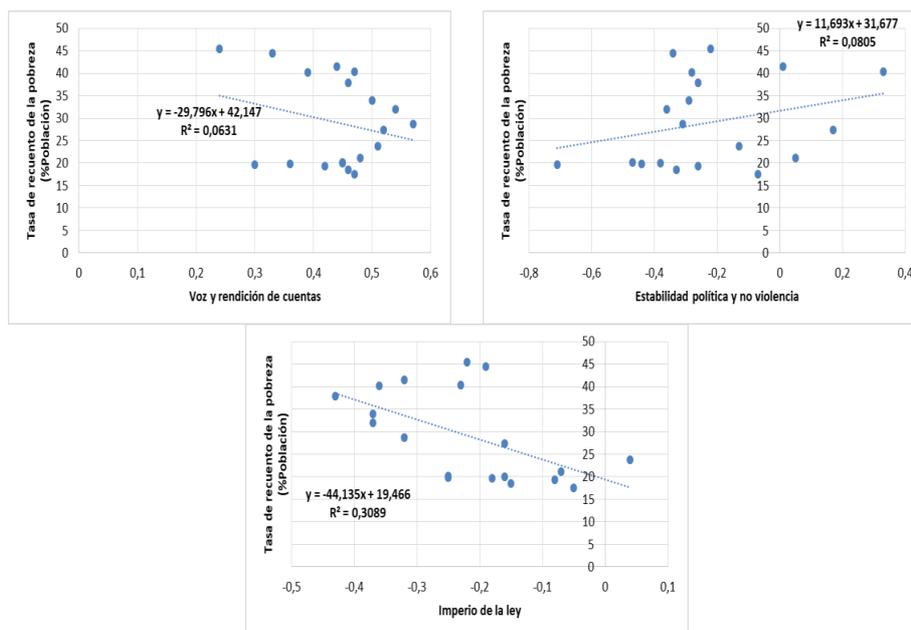


Figura 12. Relación entre la tasa de recuento de la pobreza a 5,50 dólares por día (PPA de 2011) e indicadores de gobernanza de Brasil, 1996-2019

Fuente: World Bank (2022), Kaufmann y Kraay (2022) y elaboración propia.

El caso de Brasil, que se refleja en las gráficas de la figura 12, se obtiene que los indicadores “Voz y rendición de cuentas” y “Estabilidad política y no violencia” no son significativos explicando la evolución de la tasa de recuento de la pobreza, con coeficientes de correlación iguales a 6,31% y 8,05%, respectivamente. En cambio, el indicador “Imperio de la ley” es significativo, pero solo explica el 30,89% de la tasa de recuento de la pobreza.

4.2.4 Esperanza de vida

La esperanza de vida es uno de los indicadores de desarrollo más importante, como se demuestra en el hecho de que haya sido incluido en el cómputo del IDH. A medida que un país se desarrolla mejora la calidad de vida de la población, lo que repercute positivamente en los niveles de salud y, así, en la esperanza de vida (Salas y Garzón, 2013). En el caso de Colombia, el conflicto armado ha deteriorado la calidad de vida de la población y ha podido reducir la esperanza de vida debido al ambiente de violencia y al elevado número de homicidios. Como indica Bray Mendoza (2014), el conflicto armado en Colombia ha generado una tasa promedio de 32 homicidios por cada cien mil habitantes. En el trabajo de esta autora se indica que durante la década de los años 1990 la población colombiana perdió 1,5 y 2 años de esperanza de vida debido a la violencia asociada al conflicto armado.

En este apartado estudiamos si la evolución del conflicto armado en Colombia, reflejado en los tres indicadores de gobernanza, ha tenido un impacto significativo sobre la esperanza de vida en este país. Como siempre, estos resultados se comparan con los obtenidos para Panamá y Brasil.

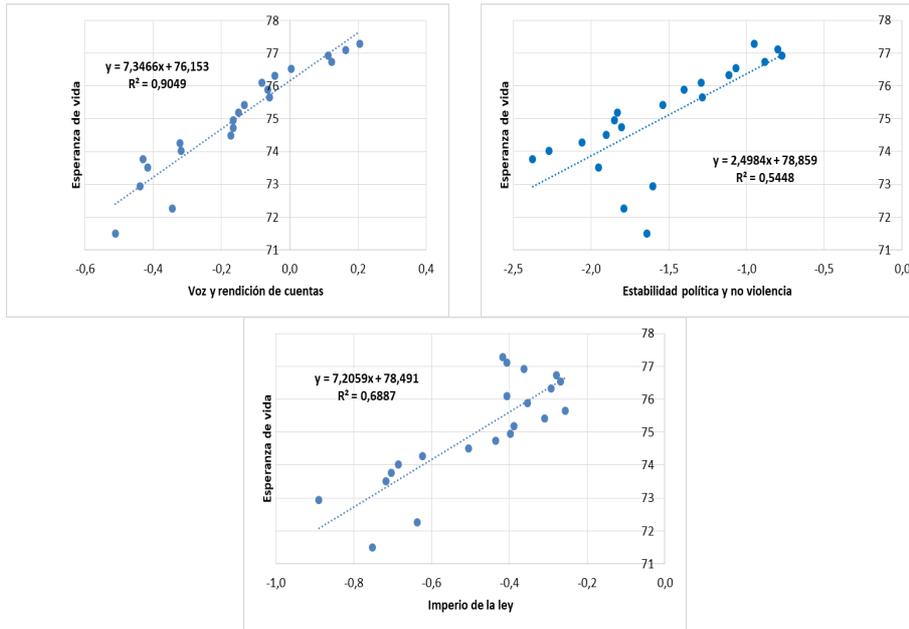


Figura 13. Relación entre la esperanza de vida e indicadores de gobernanza de Colombia, 1996-2019

Fuente: World Bank (2022), Kaufmann y Kraay (2022) y elaboración propia.

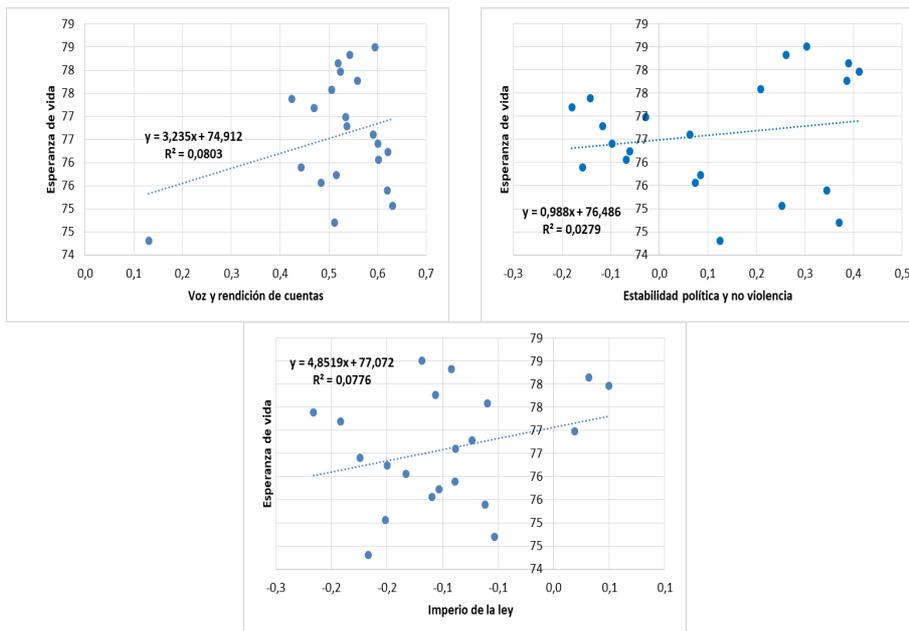


Figura 14. Relación entre la esperanza de vida e indicadores de gobernanza de Panamá, 1996-2019

Fuente: World Bank (2022), Kaufmann y Kraay (2022) y elaboración propia.

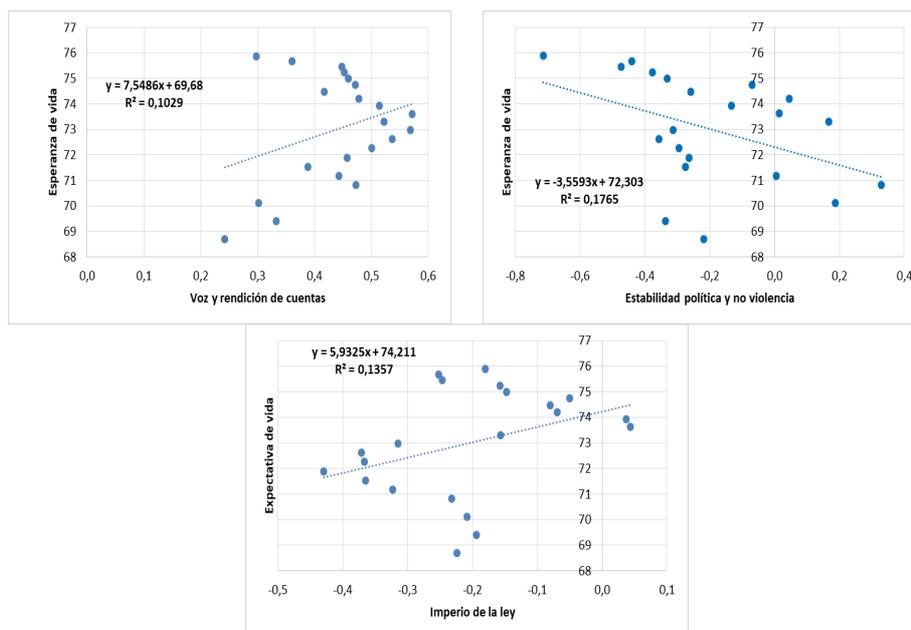


Figura 15. Relación entre la esperanza de vida e indicadores de gobernanza de Brasil, 1996-2019

Fuente: World Bank (2022), Kaufmann y Kraay (2022) y elaboración propia.

Los resultados muestran que los tres indicadores de gobernanza explican de forma significativa la evolución de la esperanza de vida en Colombia. Como se observa en la figura 13, el indicador de gobernanza de “Voz y rendición de cuentas” explica el 94% de la esperanza de vida, el indicador “Estabilidad política y no violencia” explica el 54% y, por último, el indicador “El imperio de la Ley” explica el 68%.

En el caso de Panamá la relación entre los indicadores de gobernanza y la esperanza de vida es no significativa. La figura 14 muestra que el indicador “Voz y rendición de cuentas” explica el 8% de la esperanza de vida, el indicador “Estabilidad política y no violencia” un 2% y, por último, el indicador “Imperio de la ley” explica un 7%.

Los resultados de Brasil tampoco son significativos. Como muestra la figura 15, el indicador “Voz y rendición de cuentas” explica el 1% de la esperanza de vida, el indicador “Estabilidad política y no violencia” explica el 17% y, por último, el indicador “Imperio de la ley” explica el 13%.

5. CONCLUSIONES

El conflicto armado de Colombia, que ha involucrado guerrillas y narcotráfico y que se ha desarrollado durante más de cinco décadas, ha tenido importantes efectos sobre el desarrollo socioeconómico de este país. El presente trabajo ha tenido como objetivo identificar qué indicadores de gobernanza del Banco Mundial han reflejado dicho conflicto armado, y si la evolución de dichos indicadores puede explicar la evolución de cuatro indicadores de desarrollo socioeconómico de este país. Este enfoque difiere de estudios previos, que aproximan la evolución del conflicto con el número de víctimas del mismo. A este respecto, aquí se ha argumentado que

los efectos del conflicto van más allá del número de víctimas, pues también se refleja en la percepción de la población sobre la situación política, de violencia y el imperio de la ley.

Más concretamente, este estudio ha utilizado información estadística sobre los seis indicadores de gobernanza del Banco Mundial durante el periodo 1996-2019, y ha analizado la evolución de los mismos en Colombia, comparándola con la de Panamá y Brasil, dos países limítrofes que no han experimentado conflictos armados similares a los colombianos, y que partían en 1996 con un IDH similar. Dicho análisis ha mostrado que Colombia ha tenido un desempeño ostensiblemente peor que Panamá y Brasil en los indicadores “Voz y rendición de cuentas”, “Estabilidad política y no violencia” e “Imperio de la ley”. Por tanto, se conjetura que la evolución del conflicto armado en Colombia se ha visto reflejado en estos tres indicadores de gobernanza. El paso siguiente del análisis ha sido considerar cuatro indicadores de desarrollo socioeconómico de la base de datos del Banco Mundial para el periodo 1996-2019, que son la renta per cápita, el índice de Gini, la tasa de recuento de la pobreza y la esperanza de vida. Con estos datos, se han realizado regresiones, tomando como variable explicada cada uno de los indicadores de desarrollo y como variable explicativa cada uno de los indicadores de gobernanza. Estas regresiones por pares de variables se han repetido para Panamá y Brasil, para comprobar si existe un comportamiento diferente en el caso de Colombia.

Se ha encontrado que los indicadores de gobernanza de Colombia explican la evolución de los indicadores de desarrollo socioeconómico, lo que no ocurre en los casos de Brasil y Panamá. Estos resultados sugieren que la evolución de los conflictos armados en Colombia ha tenido un impacto significativo sobre el desarrollo socioeconómico del país.

El presente trabajo podría ampliarse considerando otros indicadores de desarrollo, como el nivel educativo, los niveles de salud de la población, el gasto público social, etc. También, una comparación de los resultados de Colombia con más países del entorno añadiría robustez a los resultados.

BIBLIOGRAFÍA

- Arias, M. A., Camacho, A., Ibáñez, A. M., Mejía, D. y Rodríguez, C. (Compiladores) (2014). *Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia. ¿Cómo construir un posconflicto sostenible?* Bogotá: Universidad de los Andes. Recuperado el 6 de julio de 2024 de <https://repositorio.uniandes.edu.co/entities/publication/e0ea213b-4a7f-475b-89d7-596dbf50348e>
- Atehortúa Cruz, A. L. y Rojas Rivera, D. M. (2008). El narcotráfico en Colombia. Pioneros y capos. *Historia y Espacio*, 4(31), 169-207. <https://doi.org/10.25100/hye.v4i31.1680>
- Bilan, Y., Mishchuk, H., Samoliuk, N. y Yurchyk, H. (2020). Impact of income distribution on social and economic well-being of the state. *Sustainability*, 12(1), 429. <https://doi.org/10.3390/su12010429>
- Bray Mendoza, M. E. (2014). La influencia del conflicto armado en el índice de desarrollo humano de Colombia. *Revista Saber, Ciencia y Libertad. En Germinación*, 7, 53-58.
- Cadena Montenegro, J. L. (2010). Geopolítica del narcotráfico, México y Colombia: la equivocación en el empleo de las fuerzas militares. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 52(210), 45-58.
- Colombia CO. (16 de febrero de 2021). *Así es la Geografía Colombiana*. Marca País Colombia. Recuperado el 9 de julio de 2021, de <https://www.colombia.co/pais-colombia/geografia-y-medio-ambiente/asi-es-la-geografia-colombiana/>
- Colombia.com. (s. f.). *Geografía - Información General - Colombia Info*. Recuperado 9 de julio de 2021, de <https://www.colombia.com/colombia-info/informacion-general/geografia/>
- Colombia Mapa Político* (2021, 18 de mayo). [Fotografía]. <https://elordenmundial.com/mapas/mapa-fisico-colombia/>
- Cadavid, E. (2010). Historia de la Guerrilla en Colombia. Recuperado el 7 de julio de 2021, de <http://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/HGC.pdf>
- Calderón Rojas, J. (2016). Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto. *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, (62), 227-257. <http://www.scielo.org.mx/pdf/latinoam/n62/1665-8574-latinoam-62-00227.pdf>
- DANE (2018). Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Presidencia de la República de Colombia. Recuperado el 14 de julio de 2021, de <https://tinyurl.com/wratcsc>
- Economía de Colombia (1 de julio de 2024). Wikipedia, la Enciclopedia Libre. Recuperado el 9 de julio de 2024 de https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Colombia
- Escobar, J. (13 de enero de 2021). *Colombia*. encolombia.com. Recuperado el 9 de julio de 2021, de <https://encolombia.com/educacion-cultura/geografia-colombiana/colombia/colombia/>
- Fukuda-Parr, S., Ashwill, M., Chiappa, E., & Messineo, C. (2008). The conflict-development nexus: A survey of armed conflicts in sub-Saharan Africa 1980-2005. *Journal of Peacebuilding & Development*, 4(1), 1-16. <https://doi.org/10.1080/15423166.2008.70097248>
- Fisas, V. (2010). El proceso de paz en Colombia. *Quaderns de Construcció de Pau*, 17(7), 1-18. <http://ibdigital.uib.es/greenstone/sites/localsite/collect/cd2/index/assoc/ecp0022-1.dir/ecp0022.pdf>

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: <http://sede.ull.es/validacion>

Identificador del documento: 6600751 Código de verificación: wZ77BwpY

Firmado por: Carmen Dolores Álvarez Albelo
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 09/07/2024 17:13:57

- Gates, S., Hegre, H., Nygård, H. M., & Strand, H. (2012). Development consequences of armed conflict. *World Development*, 40(9), 1713-1722. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.04.031>
- Geografía de Colombia (s.f.). TurisColombia. Recuperado 9 de julio de 2021, de https://www.turiscolombia.com/colombia_geografia.html
- Ibarra Padilla, A. M. y Rojas Reyes, C. (2021). Estrategias contra el narcotráfico en Colombia en el marco del acuerdo de paz. *Análisis Político*, 34(103), 92-110. <https://doi.org/10.15446/anpol.v34n103.101496>
- Kaufmann, D. y Kraay (2022). *Worldwide Governance Indicators (WGI)*. Banco Mundial. Recuperado el 18 de febrero de 2023, de <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>
- Kuznets, S. (1967). Population and economic growth. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 111(3), 170-193.
- LaRosa, M. J. y Mejía, G. R. (2013). *Historia concisa de Colombia (1810-2013)*. Universidad del Rosario, Bogotá D.C. Colombia. Recuperado el 8 de julio de 2024 de <https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/10560>
- Melo, J. O. (2016). Resumen del acuerdo de paz. *Revista de Economía Institucional*, 18(35), 319-337. <https://doi.org/10.18601/01245996.v18n35.19>
- Observatory of Economic Complexity (s.f.). Where does Colombia export to? (2022) https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/col/show/all/2022
- Plaza, Ó. (1998). Corrupción estructural: El caso del narcotráfico en Colombia. *Política. Revista de Ciencia Política*, 36, 137-153. <https://revistapolitica.uchile.cl/index.php/RP/article/view/54518>
- Redacción El Tiempo (21 de junio de 1991). Cerrada la ventanilla siniestra. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-106755>
- Rico, M. R. C. (2014). Mujer: blanco del conflicto armado en Colombia. *Analecta Política*, 4(7), 301-318. <https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta/article/view/2558/2313>
- Ríos Sierra, J. (2019). *Breve historia del conflicto armado en Colombia*. Los Libros de la Catarata.
- Salas, C. y Garzón, M. O. (2013). La noción de calidad de vida y su medición. *Revista CES Salud Pública*, 4(1), 36-46. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4549356>
- Shahab, S. y Mahmood, M. T. (2022). The role of political stability and economic inequality for sustainable growth: analysis of South Asian countries. *Bulletin of Business and Economics*, 11(2), 362-368. <https://bbejournal.com/BBE/article/view/390>
- Torres Vásquez, H. (2013). La delincuencia organizada transnacional en Colombia. *Dikaion*, 22(1), 109-130. <https://doi.org/10.5294/dika.2013.22.1.4>
- United Nations Development Programme (2022). *Human Development Reports*. Recuperado el 20 de febrero de 2022, de <https://hdr.undp.org/en/content/download-data>
- World Bank (2022). *World Development Indicators*. Recuperado el 20 de febrero de 2022, de <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#>
- World Bank (2024). *World Development Indicators*. Recuperado el 21 de junio de 2024, de <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#>

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: <http://sede.ull.es/validacion>

Identificador del documento: 6600751 Código de verificación: wZ77BwpY

Firmado por: Carmen Dolores Álvarez Albelo
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 09/07/2024 17:13:57